

## REPÚBLICA DE COLOMBIA

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



#### SALA LABORAL

Medellín, treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 002 2013 00326 02 promovido por NAFER NOR Y MACÍAS DE RESTREPO y LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCÍA contra SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., a resolver el recurso de apelación presentando por la parte demandada, frente a la sentencia condenatoria emitida el 21 de abril de 2017 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

La decisión se adopta de forma escrita, de conformidad a las previsiones del decreto legislativo 806 de 2020, la cual fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala mediante providencia número **100 de 2021**.

#### ANTECEDENTES

Nafer Nory Macías de Restrepo y Luis Guillermo Restrepo García, demandaron a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., en adelante Porvenir S.A., pretendiendo se condene a esta última, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 25 de febrero

de 2009, por el fallecimiento de su hijo Cristian Camilo Restrepo Macías, sanción del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, costas y agencias en derecho.

Como fundamento de sus pretensiones expusieron que su hijo Cristian Camilo Restrepo Macías falleció el 25 de febrero de 2009 por causas de origen no profesional, siendo cotizante activo de la demandada. En vida era el encargado de forma casi total del sostenimiento económico de sus padres, sufragando gran parte de la alimentación, vestuario, servicios públicos, medicina y demás necesidades que se presentaban en el transcurso normal de sus vidas. Solicitaron la pensión de sobrevivientes y les fue negada en comunicado del 7 de julio de 2010, por incumplimiento del requisito de 50 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento de su hijo.

El 4 de julio de 2012 solicitaron nuevo estudio teniendo en cuenta el certificado de bono pensional por el tiempo servido por su hijo a la Policía Nacional del 16 de noviembre de 2006 al 16 de mayo de 2008, que sumado al cotizado a la accionada satisface con creces el requisito. El 26 de octubre de 2012 se les indicó no encontrar jurídicamente posible tener en cuenta el tiempo de servicio prestado a la Policía Nacional.

Sostienen que el causante acredita 112,14 semanas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento, de las cuales 35 fueron aportadas directamente a la demandada, y 77,14 corresponden al servicio militar obligatorio como auxiliar de policía, equivalente a 18 meses, los cuales deben ser computados. Reiteran que su hijo velaba económicamente por ellos al momento de su muerte, que no compartían techo con él porque se había trasladado a Valledupar donde se ubicó laboralmente gozando de un ingreso fijo para sostenimiento propio y el de ellos. Al momento del fallecimiento Nafer Nory Macías de Restrepo no laboraba, y Luis Guillermo Restrepo García no ha contado con una vinculación laboral fija, ejerciendo como vendedor ambulante de frutas, verduras, lo cual no produce ingresos suficientes para el sostenimiento de la pareja, siendo el causante quien les colaboraba económicamente para dar una cobertura total a los gastos de sus padres.

Informan que en la comunicación de la demandada se menciona que el causante convivía con Alin Soto, pero que entre esta y el causante existió un noviazgo de 4 meses anteriores al fallecimiento, no pudiendo existir convivencia porque el causante se encontraba prestando el servicio militar obligatorio. Resaltan que desde que se negó la pensión se exigió a dicha señora demostrar la supuesta convivencia entre ella y el causante, lo cual no ha hecho.

En auto del 2 de mayo de 2013<sup>1</sup>, se admitió la demanda y se ordenó citar a la señora Alin Soto, en calidad de presunta compañera del causante, ordenándose su emplazamiento mediante auto del 27 de mayo de 2014<sup>2</sup> y la publicación del edicto emplazatorio, el cual se llevó a cabo el 15 de junio de 2014<sup>3</sup>, sin que dicha señora compareciera al proceso.

La entidad accionada se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, necesidad del equilibrio financiero del sistema, prescripción<sup>4</sup>.

En **sentencia del 21 de abril de 2017**, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín condenó a la demandada a reconocer y pagar a los accionantes i) la pensión de sobrevivientes en un 50% del SMLMV para cada uno. ii) \$67.172.377 por retroactivo pensional causado del 25 de febrero de 2009 al 30 de abril de 2017, en un 50% para cada uno, esto es \$33.586.188,5. Se autorizó descuentos en salud. iii) se ordenó continuar pagando una mesada de un SMLMV en un 50% para cada uno (\$737.717, esto es \$368.858), con los incrementos legales y las mesadas adicionales de junio y diciembre. iv) intereses moratorios a partir del 8 de septiembre de 2010 hasta el pago. v) cotas, fijó agencias en \$7.377.170.

## RECURSO DE APELACIÓN

---

<sup>1</sup> Fl.35

<sup>2</sup> Fl.101

<sup>3</sup> Fl.104

<sup>4</sup> Fl. 62-64

Inconforme con dicha decisión, la parte demandada presentó recurso de apelación indicando que no se dejaron causadas las 50 semanas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento, necesarias para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Afirma que la a quo computó las semanas del servicio militar obligatorio, las cuales deben ser tenidas en cuenta, pero para las pensiones de jubilación en el sector público, pues el artículo 40 de la ley 48 de 1993 indica que es aplicable en los regímenes pensionales donde uno de los requisitos sea el tiempo de servicios, pero en aquellos donde la exigencia son cotizaciones efectivas, no puede aplicarse. De la relación histórica de movimientos se extrae que en el periodo 25 de febrero del 2006 al 25 de febrero del 2009, el causante solo alcanzó a cotizar 25 semanas, las cuales son insuficientes para dejar causada dicha prestación.

En cuanto a la dependencia económica, no comparte la valoración probatoria realizada por la a quo, por cuanto se tiene en cuenta la declaración de parte como una prueba válida, cuando es un medio en el cual se busca la confesión. Frente a los dos testimonios indica que no parece una declaración espontánea sino una lectura sistemática de un libreto, por cuanto ambos dicen exactamente lo mismo frente a los gastos familiares, ingresos y lo que supuestamente enviaba el causante, resultando curioso recordar con tanta exactitud en cifras exactas y coincidir declaraciones de parte y los testimonios teniendo en cuenta que el fallecimiento fue en el año 2009. Agrega que en el hecho undécimo los demandantes relatan que, para el momento del fallecimiento, el hijo se encontraba prestando servicio militar, lo cual debió ser tomado como una confesión, por cuanto en la historia laboral no se acreditan semanas de cotización posteriores a la terminación del servicio militar, lo cual es un indicativo adicional para corroborar que no existió dependencia. No se arrima una sola cotización del supuesto hospital donde trabajaba en Valledupar, desconociéndose si laboró o no.

Tampoco comparte la condena a intereses moratorios porque el retardo se debió a una situación imputable a los demandantes al momento de realizar su reclamación. Resalta que en el hecho undécimo de la demanda, se expone que el

causante convivía con Alin Soto, lo cual llevó en un primer momento a dejar en suspenso el pago de dicha prestación, por lo que tal concepto no debiera ser calculado en la fecha indicada por la a quo, porque el retardo en el supuesto pago se debió a inexactitudes presentadas en las declaraciones de los demandantes al momento de iniciar la reclamación, indicando que el causante sostenía una convivencia con dicha señora. Solicito se revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia y en su lugar se absuelva a la demandada.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La parte demandada presentó alegatos de conclusión reiterando lo argumentado en su recurso de alzada.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

Consiste en determinar, si frente a los demandantes se reúnen los requisitos legales que les otorgue derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, conforme a la Ley 797 de 2003, en calidad de padres del causante, a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y costas.

### **CONSIDERACIONES**

Preliminarmente se hace menester precisar, que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad los Arts. 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han reconocido que por regla general y salvo ciertas excepciones, el régimen jurídico aplicable para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es el vigente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, considerando que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no consagró un régimen de transición en relación con la misma.

Se probó en el expediente, que CRISTIAN CAMILO RESTREPO MACÍAS falleció el 25 de febrero de 2009<sup>5</sup>, estando afiliado al sistema general de pensiones en Porvenir S.A., por lo que las normas aplicables son los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, advirtiéndose que la demandada niega el cumplimiento de requisito de semanas y la imposibilidad de computar las semanas del servicio militar obligatorio donde la exigencia son cotizaciones efectivas, punto que pasará la Sala a resolver.

No puede perderse de vista que en aras de propugnar por la defensa de la independencia nacional y de las instituciones políticas, el artículo 216 de la Carta Política consagra la obligación de los colombianos de tomar las armas cuando las necesidades públicas así lo exijan. Sumado a ello, dicha disposición constitucional determina que las condiciones eximentes del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo serán fijadas por la ley. Por ello, en desarrollo de este precepto constitucional se profirió la Ley 48 de 1993, regulando los derechos, prerrogativas y estímulos dirigidos a quienes prestan el servicio militar obligatorio, disponiendo en su artículo 40 que “Todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio” tendrá derecho a que las entidades del Estado de cualquier orden, le sea computado el tiempo de servicio militar para efectos de pensión de jubilación y de vejez.

Esta norma tiene su génesis en el artículo 46 de la Ley 2ª de 1945, que reconoció que las personas que se desempeñaran dentro de las Fuerzas Militares tenían derecho a que el lapso de vinculación se contabilizara como tiempo de servicio válido en el trámite de pensiones, norma derogada por la Ley 126 de 1959 y el decreto 2339 de 1971. Años más tarde, el tema se retomó por el artículo 24 del decreto 2400 de 1968 y por el 101 del decreto 1950 de 1973.

A partir de estas disposiciones, la Corte Constitucional en un precedente reiterado y pacífico, ha concluido que una de las prerrogativas de quienes prestan el servicio militar obligatorio consiste en que el período que dura esa labor sea tenido en cuenta para efectos de contabilizarlo como tiempo de servicio útil en el

---

<sup>5</sup> Fl. 17

trámite de las pensiones, señalando que se trata de un beneficio que debe ser aplicado para quienes hayan prestado el servicio militar en cualquier tiempo, aun antes de que entrara en vigencia la Ley 48 de 1993, acogiendo de este modo, diversos pronunciamientos del Consejo de Estado<sup>6</sup> y de la Corte Suprema de Justicia<sup>7</sup>, que han aplicado el beneficio consagrado en el literal a del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, manifestando que debe entenderse, en el sentido de que todo ciudadano que haya prestado el servicio militar obligatorio tiene derecho a que se contabilice ese término como tiempo útil para reconocer la pensión.

La jurisprudencia constitucional<sup>8</sup> ha señalado expresamente que, con esta determinación no se genera una afectación de la sostenibilidad financiera del sistema, porque la Nación<sup>9</sup> tiene la obligación de asumir el pago del aporte por el tiempo que haya perdurado la prestación del servicio militar obligatorio, bien a través de la cuota parte correspondiente o de la cotización directa al régimen pensional elegido por el ciudadano. Sostiene que si la aplicación del artículo 40 de la Ley 48 de 1993, en el caso de pensiones que se rigen por el principio de cotización, no supone excluir a la Nación de la obligación de realizar un aporte, como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia, no cabe duda de que no existe una razón válida y objetiva que permita justificar su exclusión, cuando se trata de proceder al reconocimiento de las pensiones de vejez, invalidez o sobrevivientes, ya sea que la misma dependa del cómputo de tiempo de servicio o de cotizaciones efectivamente realizadas.

Se puntualiza que ese aporte que se debe reconocer por parte de la Nación, en el caso de pensiones que se rigen por el principio de cotización efectiva, más allá de surgir como una modalidad especial de compensación derivada del mandato del artículo 216 del Texto Superior, contribuye a su vez en la realización del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social<sup>10</sup>, que en una de sus expresiones va dirigido a colaborar con quien por razón de sus labores, como es arriesgar su vida por servir a la patria, en circunstancias concretas y específicas

<sup>6</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B” del 31 de mayo de 2007, Exp. No. 8959-05. y del 18 de julio de 2013, Exp. No. 2771-2012

<sup>7</sup> Sentencia con Radicación No. 21963 del 4 de noviembre de 2004

<sup>8</sup> Sentencias T-275 de 2010, T 510 de 2014, T 739 de 2014, T 124 de 2017 y T 477 de 2018

<sup>9</sup> ya sea a través del Ministerio de Defensa Nacional o de Hacienda y Crédito Público

<sup>10</sup> CP art. 48

vinculadas a un determinado régimen pensional, requiere que se le reconozca una cuota parte a título de compensación, cuando de ello depende la obtención de un derecho pensional.

Así mismo, existe jurisprudencia de la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, donde se ha tenido en cuenta el tiempo servido durante el servicio militar para efectos pensionales, incluso para reconocer pensión de sobrevivientes con condición más beneficiosa. Así se advierte de la sentencia SL1139-2021 del 8 de marzo de 2021, donde se indicó:

“i) Respecto de lo primero, encuentra la Sala indiscutible que el causante cotizó más de 300 semanas en toda su vida laboral, las que acreditó antes del 1° de abril de 1994, porque al permitirse la sumatoria de 245.43 semanas cotizadas al ISS (f.º 35, cuaderno principal ) con las 99.32 del servicio militar (f.º 32 *ibidem*), arroja un total de 344.75, como se asentó en sede casacional, el señor Hurtado Mandinga dejó causada la pensión de sobrevivientes en los términos del Acuerdo 049 de 1990, aplicable en virtud del principio de condición más beneficiosa”

Otras sentencias que han tratado el tema son la SL3110 y SL3691 ambas del 26 de agosto de 2020. En la primera se dijo:

“[...] En esa dirección, el literal a) del artículo 40 *ibidem* consagró que el tiempo de servicio militar obligatorio sería computado para efectos de la «pensión de jubilación de vejez», tal y como lo ha adoctrinado esta Corporación para todas las pensiones de jubilación o vejez, e incluso para las de invalidez y sobrevivencia (CSJ SL11188-2016).

Para arribar a dicha conclusión, la Sala sostiene que aquellos tiempos de servicios, de especial consideración constitucional en razón de la importancia que reviste para la defensa de la independencia del Estado, su soberanía y el mantenimiento de la sociedad organizada, tiene una connotación claramente *pública*, esto es, de servicio público y, por tal razón, deben contabilizarse a efectos de verificar la densidad de semanas requeridas para acceder a los derechos pensionales, tal como lo prevé el literal a) del artículo 40 del Ley 48 de 1993.”

Y en la segunda se aludió, además, a la procedencia de la sumatoria del tiempo del servicio militar en ambos regímenes pensionales:

“la Sala ha sostenido que respecto de aquellas pensiones regidas por la Ley 100 de 1993, sí es posible sumar el tiempo del servicio militar [...] además por cuando fue el propio Sistema de Seguridad Social Integral establecido en dicha normativa, el que permitió «que ese tiempo sea computado **en cualquiera de los dos regímenes previstos en la Ley 100**, siendo de



cargo de la entidad pública respectiva o de la Nación según el caso, el traslado de los recursos necesarios para convalidar esos tiempos frente a la seguridad social de conformidad con la ley, es decir, mediante la expedición de un bono o título pensional» (CSJ SL, 19 oct. 2011, rad. 41672; CSJ SL, 21 mar. 2012, rad. 42849) – (negrillas fuera del original).

Por consiguiente, no se equivocó el segundo Juez al considerar que el tiempo que el causante sirvió como soldado regular, equivalente a 85,72 semanas, podía válidamente adicionarse, a los aportes realizados a Porvenir S. A. a razón de 13,72, para establecer si aquél dejó causado el derecho pretendido, conforme la normativa aplicable, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.”

Bajo el contexto anterior, concluye esta Sala que, contrario a lo planteado en el recurso de alzada, en este caso se acredita el cumplimiento del requisito de semanas consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues el causante inició cotizaciones con la AFP Porvenir S.A. en mayo de 2005 donde cotizó 34,43 semanas<sup>11</sup>, y prestó servicio militar entre el 16 de noviembre de 2006 al 16 de mayo de 2008<sup>12</sup>, lapso equivalente a 77,29, para un total de 111,72 semanas, de las cuales más de 50 corresponden a los 3 años anteriores al fallecimiento del causante.

Ahora, la calidad de beneficiarios invocada por los demandantes está regulada en el artículo 74 literal d) de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que exige para la causación del derecho, la dependencia económica de los padres respecto del causante, para el momento del deceso, presupuesto legal que pasa la Sala a su análisis.

Se demostró con la documental glosada en folio 16, la filiación del causante CRISTIAN CAMILO RESTREPO MACIAS respecto a sus padres aquí demandantes.

Es importante precisar que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, y la H. Corte Constitucional<sup>13</sup>, han definido el alcance de la dependencia económica como el estado de necesidad que se predica de quien

---

<sup>11</sup> Fl.75

<sup>12</sup> Según certificación de información laboral expedido por la Policía Nacional fl. 27-28

<sup>13</sup> Mediante sentencia C-111 de 2006

depende económicamente, frente a la persona que asume la obligación de su sustento. Han precisado además, que tal situación no tiene que ser total y absoluta, porque en el contexto de un Estado Social de Derecho no puede exigirse la configuración de estados de indigencia, pero, si debe existir una relación de necesidad entre el aporte y la vida digna del beneficiario, de modo que en el contexto jurisdiccional, el análisis debe enfocarse en que sin la ayuda del benefactor, la persona frente a quien se predica la dependencia económica entraría en un estado de afectación considerable de sus derechos fundamentales, por consiguiente, al faltar la ayuda del afiliado, la economía del peticionario se vería menoscabada.

La H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en su línea jurisprudencial<sup>14</sup>, precisó las siguientes subreglas aplicables, en el estudio de éstos asuntos:

- La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada.
- Para concluir la dependencia, es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento, de modo que, al faltar el ingreso se afecte el mínimo sostenimiento de la familia.

En la demanda se indicó que el causante no vivía con sus padres al momento de su deceso, pues se había traslado a Valledupar en busca de un empleo, lugar donde pudo ubicarse laboralmente por haber sido allí donde cumplió su servicio militar obligatorio, refiriéndose en la acción: “siendo más fácil la consecución de empleo en esa ciudad, donde gozaba de un ingreso fijo con el cual satisfacer su sustento propio y el de sus padres”<sup>15</sup>. Se indica además que era el encargado, casi de manera total, del sostenimiento de los demandantes, sufragando gran parte de la alimentación, vestuario, servicios públicos, medicina y demás necesidades que se

---

<sup>14</sup> La cual se abandera por la sentencia hito, radicación N° 35.156 del 9/06/2010, ratificada en las sentencias 35.991, 37.595 y 42.792 de 2011; SL 9640 y SL 8928 de 2014; SL 8406 de 2015, SL 11871 y SL 10256 de 2017, SL 3514-2018, SL1243-2019 y SL1218-2021 entre otras.

<sup>15</sup> Hecho 9º Fl. 5

les presentaban<sup>16</sup>. Luego se afirma que “velaba por la manutención y el sostenimiento económico de sus padres al instante de su muerte”<sup>17</sup> pues la madre era ama de casa y el padre vendedor ambulante de frutas y verduras, labor que no produce ingresos suficientes para el sostenimiento de la pareja.

Punto frente al cual fue enfática la entidad demandada al indicar que los demandantes no acreditaron que, para el momento de la muerte del causante, dependieran económica de este, razón por la cual procederá la Sala con el análisis de la prueba obrante en el proceso para determinar si tal supuesto fue demostrado.

En el interrogatorio de parte indicaron al unísono los demandantes que su hijo Cristian Camilo Restrepo Macías, terminó el servicio militar y se quedó trabajando en Valledupar como vigilante privado en un hospital y ahí mismo vivía, no tuvo compañera permanente, ni convivía con nadie y les mandaba mensualmente \$180.000 o \$200.000. Sin embargo, tales afirmaciones no fueron probadas por lo siguiente:

- El causante prestó servicio militar del 16 de noviembre de 2006 al 16 de mayo de 2008 “fecha en la cual se causó su retiro del servicio activo por Licenciamiento Auxiliar de Policía mediante Resolución Nro. 0130 de fecha 16-05-2008”<sup>18</sup>. Falleció 9 meses y 9 días después, esto es el 25 de febrero de 2009.
- Entre el 17 de mayo de 2008, día siguiente a la finalización del servicio militar, y el 25 de febrero de 2009, fecha del fallecimiento, no aparecen cotizaciones en su historia laboral con ningún empleador<sup>19</sup>.
- No se aporta certificado laboral, ni ningún otro documento o prueba que acredite que efectivamente el causante laboraba como vigilante en un hospital en Valledupar, como refieren sus padres, quienes, por demás, el padre ni tan siquiera menciona el nombre del hospital y la madre dice no recordarlo.

---

<sup>16</sup> Hecho 2º fl. 4

<sup>17</sup> Hecho 8º fl.5

<sup>18</sup> Según se advierte del certificado de la Policía Nacional fl. 26-28

<sup>19</sup> Según se advierte de la relación histórica de movimientos de Porvenir Fl. 68-73

- Las declaraciones de Roció de Jesús Acevedo vda. de Grisales y Jenny Alexandra Ospina, tampoco logran acreditar dicha afirmación, pues si bien coincidieron en indicar que el causante trabajaba en seguridad en un hospital de Valledupar en el cual vivía, la razón de sus dichos es porque la demandante Nafer Nory Macías de Restrepo se los contaba. Lo que las convierte en testigos de oídas, esto es, que relatan hechos que no ha percibido por sus propios sentidos y que sólo conocen por el dicho de otras personas, razón por la cual sus declaraciones en este punto carecen de eficacia probatoria.
- Llama la atención que los demandantes indiquen en su interrogatorio de parte que el causante no tuvo compañera permanente, ni convivía con nadie al momento de su fallecimiento, pero en el “FORMULARIO SOLICITUD PRESTACIONES ECONÓMICAS PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA”<sup>20</sup>, que aparece firmado por ellos y no fue desconocido, ni tachado de manera alguna, aparezca “EL AFILIADO CONVIVIA EN UNIÓN LIBRE” se colocó X en sí. “DESDE QUÉ FECHA 05-07-2008”.
- Así mismo, en la declaración extrajuicio de 18 de enero de 2010 de la señora Rut Marcela Restrepo Rivera<sup>21</sup> que fue relacionada como prueba allegada por la entidad demandada y decretada como tal en la audiencia celebrada el 21 de abril de 2017, la testimoniante informa que el causante “por espacio de SIETE (07) MESES vivía bajo el mismo techo de forma permanente e ininterrumpida con la señora ALIN LICETH SOTO, de esta unión libre no procrearon hijos”.

Frente a este punto debe resaltarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que las declaraciones extrajuicio recibidas para fines no judiciales, como las practicadas ante Alcalde o Notario, pueden tomarse como documentos declarativos provenientes de terceros, para cuya valoración, según el artículo 220 del Código General del Proceso, no necesitan ratificación, salvo que la parte contraria lo solicite. Razonamiento que según la Corporación se acompasa con la política legislativa que en

---

<sup>20</sup> FL.76-83

<sup>21</sup> FL.93

materia probatoria se viene adoptando, con la finalidad de menguar el exceso de rigor formal que antaño campeaba en los códigos de procedimiento<sup>22</sup>.

En Este caso el apoderado de Porvenir S.A. no solicitó ratificación de tal declaración, por lo cual no era necesario en este juicio llevar a cabo dicha diligencia para que tuviesen mérito probatorio y ante dicha declaración y lo afirmado por los demandantes, contradicen la afirmación de la parte accionante que el causante viviese solo en el supuesto hospital donde trabajaba, existiendo contradicción con lo que quieren hacer ver los demandantes y las declarantes traídas al proceso.

- Lo examinado hasta acá no permite establecer que el causante efectivamente laboraba para el momento de su fallecimiento y percibía ingresos, lo cual es relevante en torno a justificar su auto sostenimiento en Valledupar y el de sus padres en Medellín. Ahora, en el hipotético caso que se hubiese acreditado tal supuesto, no se logra acreditar que este “velaba por la manutención y el sostenimiento económico de sus padres al instante de su muerte”<sup>23</sup>, pues si bien las señoras Jenny Alexandra Ospina y Roció de Jesús Acevedo vda de Grisales coincidieron en afirmar que el causante le giraba a sus padres \$180.000, \$200.000 y que en ocasiones la acompañaban al Banco Popular por el giro, no probaron los demandantes de manera alguna los supuestos giros que hacía el causante, pese a que dicha prueba era de su carga procesal y era de fácil obtención, pues si no contaban con las colillas de cada pago efectuado por el banco o entidad de giros, ello pudo probarse con un extracto bancario o con una certificación expedida por el banco Popular, entidad bancaria a la que aludieron las declarantes.

El análisis precedente permite concluir a la Sala el desacierto de la decisión de primera instancia en torno a la estimación de las pretensiones de la demanda, pues con lo dicho por los demandante en su interrogatorio de parte no se puede acreditar los fundamentos fácticos de la demanda, en tanto la finalidad procesal

---

<sup>22</sup> Sentencia de 29 de mayo de 2012, Radicado 37.517 y SL4190-2020, Radicación n.º 77776 del 19 de octubre de 2020

<sup>23</sup> Hecho 8º fl.5

de dicha prueba es provocar confesión, y de la diligencia del interrogatorio de parte, no puede extraerse válidamente alguna confesión que los favorezca a sí mismos, dado que por definición, la confesión debe versar sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia<sup>24</sup>.

Conforme a lo anterior, ha de indicarse que la prueba acá analizada, valorada a la luz del artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual le concede al Juez del Trabajo la facultad de formar libremente su convencimiento, y le permite establecer su juicio sobre los hechos debatidos en el proceso con las pruebas que más lo convenzan atendiendo a los principios que orientan la crítica de la prueba, no permite concluir la existencia de la dependencia económica alegada por los demandante, pues si bien indicaron los demandantes y las declarantes que ellos eran ama de casa y vendedor ambulante de frutas y verduras, no se acreditó que el causante efectivamente laborase en un hospital como vigilante y tuviera una fuente de ingresos para su propio auto sostenimiento y el de sus padres, y menos se acreditaron los supuestos giros que efectuaba.

Ahora, acepta esta Sala que la dependencia económica no debe ser total y absoluta, y que el mínimo de los causahabientes debe corresponder al cualitativo y no cuantitativo, empero la prueba analizada no lleva a la convicción de la existencia de la dependencia económica exigida por la ley y la jurisprudencia, no cumpliéndose con la carga de demostrar los fundamentos facticos alegados, de conformidad con el artículo 167 del CGP, y las reglas generales de la carga de la prueba expresadas, entre otros, por el tratadista Rocha Alvira, quien indica:

“a) Onus probandi, incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el deber de probar los hechos en que funda su acción;

b) Reus, in excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener que probar a su turno los hechos en que funda su defensa;

---

<sup>24</sup> Sentencias SL816 del 19 de noviembre de 2013 y SL8002 del 18 de junio de 2014, entre otras.

c) Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado ha de ser absuelto de los cargos o acción del demandante, si éste no logró en el proceso probar los hechos constitutivos de su demanda”.

Y por el tratadista Hugo Rocco, en su tratado de Derecho Procesal Civil- Parte General, quien explica que:

“La carga de la prueba no apunta a que una parte deba probar más que la otra, sino al interés que cada una tenga, según su posición en la respectiva relación jurídica, en la demostración de los hechos a los cuales el ordenamiento objetivo reconoce los efectos jurídicos deseados. Por tanto, en la medida que ambas partes llegan al proceso en igualdad de condiciones, como personas libres unas de otras, la carga de la prueba impone compromisos distintos a cada una de ellas en la protección o defensa de sus intereses. Al demandante el deber de acreditar que su contraparte se ha obligado por la ley o por su voluntad a un determinado comportamiento que debe declararse o cumplirse (hecho constitutivo); al demandado la demostración del hecho modificadorio, extintivo o impeditivo del nacimiento de la obligación reclamada”.

No alcanzándose en consecuencia, el mínimo probatorio en materia de reconocimiento de prestaciones a cargo del Sistema de Seguridad Social, frente al cual indicó la H. C.S.J. en sentencia SL1331-2021, Radicación n.º 67877 del 23 de marzo de 2021, lo siguiente:

“Por mínimo probatorio se entiende el nivel de convencimiento judicial, derivado de la valoración del conjunto de pruebas, que sirve para acreditar un hecho y tenerlo por cierto en un proceso judicial, para tomar una decisión respecto de las pretensiones o de las excepciones debatidas en el trámite jurisdiccional.

Así las cosas, en asuntos relacionados con la solicitud del reconocimiento de prestaciones propias del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, como es el caso, se requerirá la observancia de un pruebas básicas o necesarias para acreditar la condición que se alega.

Esto, traído al caso en examen, implica que, para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, deberá demostrarse el cumplimiento del requisito de convivencia exigido por los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, como regla de carga probatoria más allá del vínculo legal, y el juez concederá la pretensión cuando encuentre acreditada la satisfacción de dicho requisito sin que haya lugar a dudas razonables.”

En este caso la Sala no encuentre acreditada la satisfacción del requisito de dependencia económica de los demandantes respecto del fallecido sin que

haya lugar a dudas razonables, razón por la cual se **REVOCARÁ** íntegramente la sentencia y se absolverá de todas las pretensiones.

Costas en primera y segunda instancia a cargo de la parte demandante. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en favor de Colpensiones en la suma de \$908.526

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: REVOCAR** la decisión que se revisa en apelación y en su lugar **ABSOLVER** a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. de todas las pretensiones formuladas por NAFER NORRY MACIAS DE RESTREPO y LUIS GUILLERMO RESTREPO GARCÍA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

**SEGUNDO:** Costas en primera y segunda instancia a cargo de la parte demandante. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en favor de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. en la suma de \$908.526

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,



Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA  
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° 114 de julio 1 de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JAIME ALBERTO  
ARISTIZABAL GOMEZ  
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL**

**SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-  
ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ  
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE  
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES  
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE  
LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena  
validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto  
reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**bf198cc9f52064815646964a917872ccefca4bc85e68fd9390bd775190a18c89**

Documento generado en 30/06/2021 03:26:05 PM